

Reflexiones finales

Educación superior pública en las Américas: tensiones compartidas y proyecciones comunes institucionales

Las universidades públicas en las Américas reflejan realidades diversas, pero también comparten tensiones estructurales que interpelan a las políticas públicas. En Chile, se enfrentan a un sistema privatizado que las obliga a competir en desventaja con instituciones privadas, limitando su autonomía y capacidad de innovación. En Brasil, pese a concentrar la mayor producción científica, representan solo una minoría de la matrícula y soportan el peso de un modelo mercantilizado que privilegia la masificación sin garantizar inclusión ni calidad. En Argentina, las universidades defienden con fuerza los principios de la Reforma de 1918 —autonomía, gratuidad, cogobierno—, pero deben sostenerlos en contextos de crisis económicas y desigualdades persistentes. En Ecuador, la experiencia de Chimborazo muestra cómo las reformas estatales han tensionado a las instituciones, imponiendo estándares homogéneos que no siempre reconocen la diversidad territorial. En México, casos como la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Colima evidencian la contradicción entre objetivos ambiciosos de cobertura y modernización, y la precariedad financiera que limita su impacto real. Finalmente, en Estados Unidos, el estudio de Texas Tech y UC Merced muestra la relevancia de las universidades públicas como motores de movilidad social, aunque condicionadas por la disminución del financiamiento estatal y la presión de modelos selectivos y competitivos.

En conjunto, el análisis evidencia concordancias que atraviesan fronteras: la insuficiencia del financiamiento, la presión de la mercantilización, las desigualdades territoriales, y la tensión entre autonomía y control estatal. Al mismo tiempo, las universidades públicas se erigen como espacios de resiliencia y transformación, con capacidad para sostener misiones de equidad, inclusión y

desarrollo social incluso en escenarios adversos. El desafío común para las políticas públicas es superar la lógica de mercado y avanzar hacia un pacto renovado con las universidades, que reconozca su singularidad, fortalezca su financiamiento estable y promueva su misión como bien público. Solo así podrán seguir siendo pilares estratégicos de cohesión democrática, justicia social y desarrollo sostenible en las Américas

La educación superior pública en las Américas se enfrenta a un escenario complejo, donde convergen procesos históricos, normativos y culturales que han configurado sistemas heterogéneos, pero atravesados por desafíos comunes. Al examinar los artículos desde los casos de Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, México y Estados Unidos, es posible advertir que, pese a sus diferencias estructurales, las universidades públicas comparten tensiones en torno a su financiamiento, su autonomía, el reconocimiento de su misión y la creciente mercantilización que redefine sus horizontes. Esta reflexión crítica busca situar a las universidades públicas como actores estratégicos en el desarrollo democrático y social de la región, a la vez que señala los límites y contradicciones de las políticas públicas que las regulan.

El caso chileno se erige como un ejemplo paradigmático de cómo las políticas públicas pueden consolidar un sistema en el que lo público queda subsumido bajo la lógica del mercado. Las universidades estatales operan en un marco de financiamiento basado en subsidios a la demanda y fondos concursables, en competencia desigual con el sector privado. El Estado, al relegarse a un rol subsidiario, ha favorecido un sistema donde la educación se concibe como un servicio transable más que como un derecho social. Frente a este escenario, las universidades públicas han debido sostener su compromiso con la equidad y el desarrollo territorial, aunque con limitadas capacidades de planificación y autonomía. La política pública, en este contexto, aparece más como un factor de restricción que como un apoyo, erosionando el valor social y democrático de la universidad pública.

En Brasil, las últimas décadas han estado marcadas por una expansión significativa de la matrícula en educación superior, impulsada por políticas de acceso. Sin embargo, esta ampliación se ha dado bajo el predominio del sector

privado, que hoy concentra más del 79% de los estudiantes. Las universidades públicas, pese a representar solo una quinta parte de la matrícula, concentran la mayor parte de la investigación y producción científica del país. Aquí se evidencia una paradoja: mientras las políticas de inclusión han democratizado el acceso, al mismo tiempo han reforzado la dependencia del sector privado y han introducido criterios de gestión basados en la lógica empresarial. El dilema de la política pública brasileña radica en decidir si la educación superior será concebida como un bien social y estratégico, o como un servicio sujeto a la rentabilidad y la competencia.

En el caso argentino, la universidad pública se presenta como uno de los bastiones más claros de defensa del acceso irrestricto, la gratuidad y la autonomía universitaria, principios que se remontan a la Reforma de 1918. Las universidades como la UNNOBA y la UNLP muestran una clara vocación por sostener estos valores, aun en contextos de crisis económicas y tensiones políticas. Sin embargo, las políticas públicas deben enfrentar el desafío de garantizar no solo cobertura, sino también calidad, permanencia y sostenibilidad, en un escenario de desigualdades territoriales y transformaciones digitales. Aquí, la política pública se enfrenta a un dilema: cómo sostener un modelo inclusivo y gratuito sin que ello derive en precarización o pérdida de calidad. La universidad argentina, por tanto, encarna tanto la fortaleza histórica de la autonomía como las tensiones actuales del financiamiento y la equidad.

El caso de la Universidad Nacional de Chimborazo evidencia cómo las reformas estatales y los procesos de acreditación, han operado como instrumentos de homogeneización que, si bien han impulsado mejoras en gestión e investigación, también han impuesto estándares que desconocen particularidades territoriales y sociales. El logro de la UNACH radica en haber transformado un diagnóstico inicial adverso en una oportunidad de fortalecimiento institucional, situándose entre las mejores universidades del país. No obstante, persisten desafíos vinculados al financiamiento insuficiente, la rigidez de los marcos regulatorios y la dificultad de articular investigación con necesidades locales. Desde la política pública, el reto es generar marcos que reconozcan la diversidad y fortalezcan la equidad territorial, en lugar de imponer modelos uniformes que terminan amplificando las desigualdades estructurales.

México muestra un panorama dual. Por un lado, universidades como la de Guanajuato exponen los límites de un sistema de financiamiento insuficiente, con reglas poco claras y dependiente de decisiones centralizadas. Esto limita la autonomía y restringe la capacidad de innovar en ciencia y tecnología. Por otro lado, experiencias como la de la Universidad de Colima demuestran la posibilidad de construir proyectos estratégicos de largo plazo, como el Plan Educativo, que apuesta por la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar integral. Esta tensión revela un problema de fondo en la política pública mexicana: mientras los planes nacionales proyectan objetivos ambiciosos, los recursos asignados resultan insuficientes, generando un desfase entre expectativas y posibilidades reales. El desafío radica en conciliar políticas de cobertura y modernización con un financiamiento estable y una visión de equidad social.

En el contexto estadounidense, el análisis de Texas Tech y UC Merced muestra cómo las universidades públicas han debido reinventarse en un escenario de financiamiento decreciente y creciente mercantilización. El modelo norteamericano, que alguna vez fue símbolo de acceso y movilidad social, hoy enfrenta una reducción de fondos estatales que ha trasladado el costo de la educación a los estudiantes y sus familias. Sin embargo, estas instituciones han desplegado estrategias innovadoras para sostener su misión, ya sea mediante la diversificación de ingresos, la implementación de analítica avanzada o el diseño de programas enfocados en el éxito estudiantil. La crítica desde la política pública es clara: mientras las universidades son reconocidas como motores de movilidad e innovación, se las obliga a operar bajo criterios de mercado que ponen en riesgo su misión pública y su accesibilidad.

El recorrido por estos países permite reconocer convergencias claras. En primer lugar, el financiamiento insuficiente aparece como el principal obstáculo, expresado en diversas formas: dependencia de aranceles en Chile, subfinanciamiento en Brasil, precariedad en México o reducción de fondos estatales en Estados Unidos. En segundo lugar, se observa la tensión entre autonomía y control estatal, ya sea en las regulaciones ecuatorianas, en los indicadores de desempeño chilenos o en las presiones fiscales argentinas. En tercer lugar, la mercantilización de la educación se ha convertido en una tendencia transversal,

que redefine a las universidades como competidoras en un mercado, debilitando su condición de bien público. Finalmente, la desigualdad territorial y social emerge como una constante, donde las universidades deben sostener misiones de inclusión con menos recursos y menor reconocimiento.

No obstante, también se advierten fortalezas compartidas. Las universidades públicas en toda la región muestran resiliencia, capacidad de adaptación e innovación institucional. Desde la defensa de la gratuidad en Argentina, la investigación en Brasil, los proyectos de largo plazo en México, hasta las estrategias de inclusión en Estados Unidos, estas instituciones han demostrado ser actores centrales en la democratización del conocimiento y el desarrollo social.

La reflexión crítica que emerge de este análisis es que las políticas públicas deben abandonar la lógica de tratar a las universidades públicas como un actor más del mercado. Por el contrario, deben reconocer su carácter estratégico y diferenciador: son instituciones llamadas a producir conocimiento socialmente pertinente, garantizar equidad y sostener la cohesión democrática. Para ello, es urgente avanzar hacia un pacto renovado entre Estados y universidades públicas, que asegure financiamiento basal suficiente, respete la autonomía y reconozca la diversidad de contextos. La alternativa es clara: sin este compromiso, las universidades públicas se verán crecientemente debilitadas, erosionando no solo sus proyectos institucionales, sino también las bases de desarrollo democrático en los países de la región.

El análisis comparado permite identificar un conjunto de tensiones compartidas como: Financiamiento insuficiente y dependencia de lógicas competitivas, que limitan la sostenibilidad y profundizan desigualdades; Tensiones entre autonomía y control estatal, donde las regulaciones pueden terminar debilitando la innovación y la diversidad institucional; Mercantilización de la educación, que redefine a la universidad como un servicio y no como un bien público; y, Desigualdades sociales y territoriales, que dificultan garantizar equidad en el acceso, permanencia y éxito estudiantil.

Estas tensiones inciden directamente en el desarrollo de los países, pues limitan el potencial de las universidades públicas para formar capital humano avanzado, producir conocimiento pertinente y contribuir a la cohesión

democrática. Más allá de las particularidades nacionales, la reflexión crítica apunta a una conclusión clara: las universidades públicas son un bien común estratégico para el desarrollo sostenible de las Américas. Defender su misión pública implica reconocer que no solo son centros de formación e investigación, sino también espacios de inclusión social, movilidad intergeneracional y construcción democrática.

Por ello, se requiere avanzar hacia un pacto político regional y nacional que garantice financiamiento estable, autonomía responsable, equidad territorial y reconocimiento del valor estratégico de estas instituciones. Trabajar en conjunto —Estados, universidades y sociedades— permitirá resistir la lógica de mercantilización y proyectar un modelo de educación superior pública que, más allá de formar profesionales, contribuya a imaginar y construir futuros más justos, democráticos y sostenibles para la región.

*Óscar Garrido Álvarez
Universidad de Los Lagos, Chile*

*Omar Altamirano Ojeda
Universidad de Los Lagos, Chile*